



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 11.756/2022

“CAT ARGENTINA SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

La empresa CAT ARGENTINA SA cuestiona la Resolución Administrativa 2026-E-2021 en cuanto le impone el pago de diferencias por contribuciones patronales por errónea aplicación de la alícuota del 17% para el cálculo de las contribuciones patronales previstas en el inciso b) del artículo 2do del Decreto 814/2001 en lugar de aplicar el inciso a) de la mencionada norma, atento las ganancias obtenidas que, según sostiene el organismo fiscal, habrían superado el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos de 07/2017 a 06/2019 reclamando \$ 9.484.061,22 en concepto de capital, \$ 5.466.010,27 imputable a intereses y \$ 1.896.812,24 por multa con base en la aplicación del artículo 15 punto 1º inciso e. de la ley 17.250 reglamentado por el artículo 16 de la la RG 1.566 (t.o.2010).

Ante la exigencia impuesta por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante acompaña una póliza de seguro de caución emitida por Chubb Seguros Argentina SA N° de póliza 2397667 por la cantidad de \$14.950.071,49.

Entiendo prudente habilitar la presente instancia dado lo elevado del monto que se reclama y que, en principio, su pago podría comprometer seriamente los recursos financieros de la apelante. La solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros). Por otra parte, el Tribunal Címero consideró que el seguro de caución garantiza suficientemente el interés fiscal por lo que debe tenerse por satisfecho la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820 (conf. CSJN “Orígenes AFJP SA c/AFIP s/Impugnación de deuda” sent. del 04/11/2008).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, no advierto que la impugnación formulada resulta viable.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105 ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La parte actora en su escrito de impugnación insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues afirma que el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola (conf. Res. 675/2002 SEPYME \$ 86.400.000, Disposición 147/2006 SEPYME \$ 88.800.000, y a partir del 20/08/2010 a la fecha, el importe fijado para ser PYME es de \$ 111.900.000 y así sucesivamente hasta llegar a los actuales montos definidos en virtud de la vigente Resolución 220/2019, recientemente vueltos a modificar por la resolución 69/2020.

Refiere, a mayor abundamiento, que tanto los volúmenes de comercialización no han tenido variaciones significativas en lo que hace a la cantidad. Lo único que ha variado es el precio de cada uno de los productos comercializados, ello como consecuencia de las sucesivas subas de precio, pero no por un incremento significativo de los volúmenes de ventas.

Por último CAT ARGENTINA SA solicita se la exima del pago de la multa pretendida pues según entiende su parte no ha incumplido obligación previsional alguna, correspondiente a los periodos involucrados, ello demuestra que su parte carece de ánimo defraudatorio.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo a mayor abundamiento cabe expresar que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (07/2017 a 06/2019) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Por último y con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad, merito, eficacia, extensión de la labor realizada, y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15UMA (\$ 156.000) y 10 UMA (\$104.000) respectivamente, CSJN. Ac. 25/2022.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 156.000) y 10 UMA (\$ 104.000) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.25/2022).

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Comparto la propuesta de la Dra. Dorado en cuanto a la admisibilidad formal del recurso de impugnación presentado pero no en cuanto al fondo de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal.

CAT ARGENTINA SA apela la Resolución N° 2026-E-2021 que no hace lugar al planteo de revocatoria previamente deducido por la empresa por el que se cuestionaba el ajuste determinado en concepto de diferencias de contribuciones patronales y multa, por incorrecto encuadre de las disposiciones establecidas en el Decreto 814/2001, artículo 2, en los periodos 07/2017 a 06/2019.

El recurrente no efectúa el depósito previo de la suma cuestionada (art. 15 ley 18820) Adjunta en su reemplazo una póliza de seguros de caución emitida por Compañía Chubb Seguros Argentina SA por la totalidad del monto requerido por AFIP a fin de dar cumplimiento a la exigencia prevista por la norma. Fundamenta su pedido en el precedente “Orígenes AFJP SA c/AFIP” sentencia del 04/11/2008 del Supremo Tribunal de la Nación peticionando la apertura de la presente instancia.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En su memorial recursivo, el apelante sostiene que el cálculo de las contribuciones patronales a su cargo es el correspondiente a la alícuota reducida aplicable a las empresas que se encuentran dentro de los parámetros de una PyME conforme lo disponen las resoluciones dictadas por su autoridad de aplicación de acuerdo a sus ventas totales anuales y no resulta encuadrable en lo establecido en el artículo 2 inc. a del Decreto 814/2001 como pretende el organismo. Sostiene que los valores de ventas totales anuales para ser considerada PyME fueron actualizados por la autoridad de aplicación durante sucesivos años. Así la Resolución 675/2002 modificó la anterior Resolución 24/2001 elevando el monto a \$ 86.400.000, posteriormente, a partir del periodo 26/10/2006, eleva al monto de \$ 88.800.000 conf. Res. 147/2006 y, a partir del 20/08/2020, a \$ 111.900.000 y así sucesivamente hasta llegar a los actuales montos a través de la Resolución 220/2019 posteriormente modificada por la Resolución 69/2020 (ver escrito de impugnación).

La AFIP, por su parte sostiene que no existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas, sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

Afirma que en cuanto a la remisión efectuada por el Decreto N° 1009/01 a la Resolución SPyME N° 24/2001, la única finalidad de esa remisión es la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas, pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota de contribuciones patronales es el que surge de dicho decreto, ya que ese aspecto no ha sido modificado. El límite de \$48.000.000 es la definición de PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 a los efectos de la aplicación de su similar N° 814/01, motivo por el cual todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" cuyas ventas totales anuales superen los \$ 48.000.000 debe tributar conforme a la alícuota del 21%. El Decreto N° 1009/01, a través de su artículo 1, reglamenta las condiciones de aplicación del artículo 2° del Decreto N° 814/01. Las mismas no pueden ser modificadas sino por una norma que ostente al menos, la misma jerarquía. En otras palabras, el tope de \$48.000.000 establecido por el artículo 1° del Decreto N° 1009/01 podría ser modificado por el PEN mediante la emisión de un nuevo Decreto, manteniéndose inalterable ante el dictado de normas de jerarquía inferior, tal como son las dictadas por la SPyME, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-. El Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Resolución SPyME N° 24/01 por la posterior Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN. Se ratifica, entonces, la tipificación de la multa impuesta. El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyME, por remisión a la Resolución N° 24/2001 la que a través de su art. 1°, estableció serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella fijados. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala, a los efectos de los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

Dado que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME y no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyME en la actividad comercial. Situación, por otra parte, que se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación de la infraccionada arroja un monto inferior al límite fijado por las distintas Resoluciones dictadas con posterioridad a la 675/2002,147/2006,21/2010,50/2013,357/2015,11/2016,103/2017,340/2017,519/2018, y modificatorias correspondientes al periodo objeto de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b. Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. También la ley 27541, vigente desde el 23 de diciembre de 2019, introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo del cargo formulado, por lo que propondré revocar la resolución recurrida en los términos indicados.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo estrictas pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$2.600.000) CSJN Ac. 25/2022.Importe al que se le adicionara el IVA en caso de corresponder. (conf. CSJN “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. del 16/06/93). Con respecto a los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

En virtud de lo expresado, propongo declarar habilitada la instancia judicial, se revoque la resolución impugnada con el alcance indicado, imponiendo las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 2.600.000) importe a los que se agregará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 2º de la ley 27.423.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Walter Carnota.

Por lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la instancia judicial, 2º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 3º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 4º) Regularlos honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 2.600.000) importe a los que se agregará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

